

No. 40353

**Mexico
and
Nicaragua**

Treaty between the Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Nicaragua on the enforcement of criminal sentences. Mexico City, 14 February 2000

Entry into force: *14 March 2001 by notification, in accordance with article XVIII*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Mexico, 18 June 2004*

**Mexique
et
Nicaragua**

Traité entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à l'exécution des condamnations pénales. Mexico, 14 février 2000

Entrée en vigueur : *14 mars 2001 par notification, conformément à l'article XVIII*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Mexique, 18 juin 2004*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**TRATADO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
NICARAGUA SOBRE LA EJECUCION DE
SENTENCIAS PENALES**

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, a quienes en lo sucesivo se les denominará "las Partes";

DESEANDO fomentar la colaboración mutua en materia de ejecución de sentencias penales;

ESTIMANDO que el objeto de la readaptación de los reos es su incorporación a la vida social, después de que han adquirido buena conducta y realizado actividades de diversa naturaleza en los centros de reclusión, que les permitan actuar de manera consecuente en el entorno de nuestros países;

CONSIDERANDO que para el logro de ese objetivo es conveniente dar a los nacionales que se encuentran privados de su libertad en el extranjero, como resultado de la comisión de un delito, la posibilidad de cumplir la condena dentro de su país, ya que mediante el acercamiento familiar y la posibilidad de vivir conforme a las costumbres de su país, se propicia su reinserción social;

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO I

Definiciones

Para los fines de este Tratado se entiende que:

- a) "Estado Trasladante" es el Estado Parte del cual el reo habrá de ser trasladado;
- b) "Estado Receptor" es el Estado Parte al que el reo habrá de ser trasladado;
- c) "Sentencia" es la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena por la comisión de un delito, la privación de la libertad o restricción de la misma, ya sea que esta última consista de un régimen de libertad condicional, de condena de ejecución condicional o de otras formas de supervisión sin detención. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté pendiente recurso legal alguno contra ella en el Estado Trasladante, y que el término previsto para interponer dicho recurso haya vencido.
- d) "Reo" es la persona que en el territorio de uno de los Estados Parte cumple una pena privativa de libertad, con motivo de una resolución que ha causado ejecutoria.

ARTICULO II

Alcance

1. Las penas irrogadas en los Estados Unidos Mexicanos a nacionales de Nicaragua, podrán ser ejecutadas en establecimientos penales de este país o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y de la legislación nicaragüense.

2. Las penas impuestas en Nicaragua a nacionales de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser ejecutadas en establecimientos penales de este último país o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y de la legislación mexicana.

ARTICULO III

Autoridad Coordinadora

Para asegurar el debido cumplimiento de la ejecución de las sentencias penales entre las Partes, los Estados Unidos Mexicanos designan como autoridad coordinadora a la Procuraduría General de la República y la República de Nicaragua designa como autoridad coordinadora al Ministerio de Gobernación, las cuales se encargarán de ejercer todas y cada una de las funciones previstas en el presente Tratado.

ARTICULO IV

Condiciones para la Aplicación

El presente Tratado se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones:

1. Que el delito por el cual el reo fue declarado culpable sea punible en el Estado Receptor; sin embargo, a tal efecto no se tendrán en cuenta las diferencias de denominación o las que no afecten a la especie misma del tipo del delito.

2. Que el reo sea nacional del Estado Receptor. En el momento de la presentación de la solicitud de traslado, el reo deberá acreditar fehacientemente, con documentos públicos, su condición de nacional del Estado Receptor.

3. Que el delito por el cual fue sentenciado el reo no sea de tipo político en el Estado Receptor.

4. Que la sentencia impuesta al reo pueda ser cumplida o ejecutada en el Estado Receptor.

5. Que la sentencia mediante la cual se impuso la sanción en ejecución se encuentre firme y que no exista causa legal alguna que impida la salida del reo del territorio nacional. Se entenderá que existe sentencia firme y definitiva en los términos que señala el Artículo I, inciso c) del presente Tratado. Constituye impedimento para autorizar el traslado, la solicitud de extradición formulada por un tercer Estado, que se encuentre en trámite o que haya sido acordada.

6. Que la situación del reo no sea agravada por el traslado.

7. Que la parte de la pena que faltare por cumplirse al momento de efectuarse la solicitud sea mayor a seis meses.

8. Que la pena que esté cumpliendo el reo tenga una duración determinada en la sentencia condenatoria.

9. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado Receptor.

10. Que el reo otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo sido informado previamente de las consecuencias legales del mismo.

ARTICULO V
Suministro de Información

Las autoridades coordinadoras designadas por las Partes informarán a todo reo nacional de la otra Parte sobre la existencia del Tratado, la posibilidad que le brinda la aplicación del mismo y las consecuencias jurídicas que se derivarían de su traslado. Esta información también podrá ser proporcionada al reo por los agentes consulares de su país.

Las Partes mantendrá informado al reo del trámite de su traslado, así como de las decisiones adoptadas por cualquiera de las Partes respecto de su solicitud de traslado. A tal fin, las Partes facilitarán a las autoridades coordinadoras la información que soliciten.

ARTICULO VI
Consentimiento del Reo

1. El traslado del reo al Estado Receptor sólo procederá a voluntad expresa del mismo, para lo cual podrá contactar a la autoridad competente del Estado Trasladante, para solicitar que se preparen los antecedentes y estudio del reo.

2. La voluntad del reo de ser trasladado debe ser expresada por escrito.

3. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado impedirá que un reo pueda presentar una solicitud para su traslado ante el Estado Trasladante o en el Estado Receptor.

ARTICULO VII

Procedimiento previo al Traslado

1. Es potestad discrecional del Estado Trasladante autorizar el traslado y será igualmente facultad discrecional del Estado Receptor aceptarlo.

2. Antes de efectuarse el traslado, el Estado Trasladante permitirá al Estado Receptor verificar, si lo desea, mediante un funcionario designado por éste, que el reo haya dado su consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias legales del mismo.

3. Al tomar la decisión relativa al traslado de un reo, las Partes podrán considerar, entre otros factores, la posibilidad de contribuir a su rehabilitación social; la gravedad del delito; sus antecedentes penales; su estado de salud y los vínculos familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado Trasladante y en el Estado Receptor.

4. Si el reo solicita su traslado ante la autoridad coordinadora del Estado Trasladante y éste lo considera procedente, transmitirá una solicitud en ese sentido por los canales diplomáticos a la autoridad del Estado Receptor.

5. Si la autoridad del Estado Receptor acepta la solicitud, lo comunicará sin demora al Estado Trasladante e iniciará los procedimientos necesarios para efectuar el traslado del reo. Si no lo acepta, lo hará saber sin demora a la autoridad del Estado Trasladante.

6. Si el reo solicita su traslado ante la autoridad coordinadora del Estado Receptor, éste podrá solicitar a la autoridad coordinadora del Estado Trasladante que se preparen los antecedentes y estudios correspondientes del mismo.

7. Si el Estado Trasladante considera procedente la solicitud de traslado del reo, comunicará dicha resolución al Estado Receptor para que, cumplidas las formalidades internas, se efectúe la entrega de éste.

8. El Estado Trasladante deberá acreditar, si lo solicita el Estado Receptor, que el reo conoce las consecuencias legales que implica el traslado y que otorga libremente su consentimiento para que se lleve a cabo.

ARTICULO VIII
Negativa al Traslado

1. Cuando el Estado Trasladante no apruebe el traslado de un reo, comunicará su decisión de inmediato al Estado Receptor explicando el motivo de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente. Cuando se modifiquen las condiciones que sirvieron de base a la negativa del traslado, cualquiera de las Partes podrá solicitar de nuevo el traslado del reo.

2. Si después de cumplir su condena el reo trasladado reincide en la comisión de un delito en el territorio del Estado Trasladante, éste último podrá negar cualquier solicitud de traslado del reo formulada por el Estado Receptor o por el mismo reo.

ARTICULO IX
Documentación Justificativa

1. El Estado Receptor acompañará a la solicitud de traslado:

- a) un documento que acredite que el reo es nacional de dicho Estado;
- b) una copia certificada de las disposiciones legales de las que resulte que los actos u omisiones que han dado lugar a la condena constituyen también un delito en el Estado Receptor;
- c) información acerca de los factores pertinentes y la probabilidad de que el traslado contribuya a la inserción social de aquél, tomando en cuenta aspectos como la edad, los vínculos de residencia en el territorio, relaciones familiares u otros motivos, en el Estado Receptor, y
- d) información aproximada acerca de cómo se cumplirá la condena en dicho Estado Receptor, especialmente referida a la modalidad y tiempo.

2. El Estado Trasladante acompañará a su solicitud de traslado:

- a) una copia certificada de la sentencia, haciendo constar que es firme;
- b) una copia certificada de las disposiciones legales aplicables;
- c) la indicación de la duración de la pena, el tiempo ya cumplido y el tiempo que deba abonársele por motivos tales como trabajo, buena conducta y prisión o detención preventiva;
- d) un documento en el que conste el consentimiento del reo para el traslado, y
- e) información sobre la indole y gravedad del delito, los antecedentes penales del reo, las condiciones de salud de éste y cualquier información adicional que pueda ser útil a las autoridades del Estado Receptor.

3. Cualquiera de las Partes podrá, antes de formular una solicitud de traslado, solicitar a la otra Parte los documentos e informaciones a que se refieren los numerales 1 y 2 de este Artículo.

ARTICULO X

Entrega y Gastos del Traslado

1. Aprobado el traslado, las Partes convendrán el lugar y la fecha de la entrega del reo y la forma como se hará efectiva. El Estado Receptor será el responsable de la custodia y transporte del reo desde el momento de la entrega.

2. Todos los gastos relacionados con el traslado del reo hasta la entrega para su custodia al Estado Receptor serán por cuenta del Estado Trasladante.

3. El Estado Receptor se hará cargo de los gastos de traslado desde el momento en que el reo quede bajo su custodia.

4. El Estado Trasladante no tendrá derecho a reembolso alguno por los gastos efectuados con motivo del cumplimiento de la ejecución de la condena del reo.

ARTICULO XI

Jurisdicción del Estado Trasladante

El Estado Trasladante mantendrá la jurisdicción exclusiva con referencia a las sentencias impuestas y cualesquiera procedimientos que involucren revisión, modificación o anulación de las sentencias impuestas por sus tribunales de justicia. En consecuencia, el Estado Receptor, al recibir una notificación del Estado Trasladante de cualquier decisión que afecte a una sentencia, deberá adoptar las medidas que correspondan, conforme a dicho aviso.

El Estado Trasladante conservará la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia al reo. El Estado Receptor, al recibir notificación de cualquier decisión al respecto, deberá instrumentar de inmediato las medidas correspondientes.

ARTICULO XII
Jurisdicción del Estado Receptor

1. El cumplimiento de la sentencia de un reo se sujetará a las leyes y procedimientos del Estado Receptor incluyendo la aplicación de toda disposición relativa a la reducción del período de prisión por medio de libertad vigilada, libertad condicional o cualquier otra forma alternativa a la prisión.

2. Ninguna pena de prisión será ejecutada por el Estado Receptor, de tal modo que prolongue la duración de la pena más allá de la fecha en que quedaría cumplida, de acuerdo con la sentencia del Estado Trasladante.

3. Las autoridades coordinadoras de las Partes intercambiarán cada seis meses informes sobre la situación que guarda la ejecución de las sentencias de todas las personas trasladadas conforme al presente Tratado, incluyendo, en particular, los relativos a beneficios al reo de acuerdo con la legislación interna de cada Parte. Las Partes podrán solicitar, en todo momento, un informe especial sobre la situación que guarde la ejecución de una sentencia individual.

4. Un reo entregado para la ejecución de una sentencia conforme al presente Tratado no podrá ser detenido, procesado ni sentenciado en el

Estado Receptor por el mismo delito que motivó la sentencia a ser ejecutada, ni tampoco se podrá convertir la pena en una sanción pecuniaria. El Estado Receptor no ejecutará acción penal en contra del reo por cualquier delito respecto del cual el ejercicio de la acción penal no sería posible, conforme a las leyes de ese Estado.

5. El que un reo haya sido trasladado conforme a lo establecido en este Tratado, no afectará sus derechos civiles en el Estado Receptor, más allá de lo que pudiera afectarlo, conforme a las leyes del Estado Receptor, por el hecho mismo de haber sido objeto de una condena en el Estado Trasladante.

ARTICULO XIII

Aplicación del Tratado en Casos Especiales

1. El presente Tratado también podrá aplicarse a personas sujetas a vigilancia u otras medidas de acuerdo con las leyes de cualquiera de las Partes relacionadas con infractores menores de edad, siempre que se demuestre la conveniencia del traslado para fines de readaptación. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien esté legalmente facultado para otorgarlo.

2. Si así lo acordaren las Partes y a efecto de su tratamiento en el Estado Receptor, el presente Tratado podrá aplicarse a personas a las cuales la autoridad competente hubiera declarado inimputables. Las Partes acordarán, de conformidad con su derecho interno, el tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien legalmente esté facultado para otorgarlo.

3. Por acuerdo especial entre las Partes y por razones humanitarias, los reos de quienes se haya comprobado plenamente que sufren una enfermedad que se encuentre en fase terminal, o sean de edad muy avanzada, podrán ser trasladados para su tratamiento a instituciones del país de su nacionalidad.

4. Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de limitar la facultad que las Partes pueden tener para conceder o negar el traslado del reo.

ARTICULO XIV
Falsificación de Documentos

En caso de que algún reo haya utilizado documentación falsa de un nacional del Estado Receptor, para obtener el traslado hacia el territorio de una de las Partes, la autoridad coordinadora de ese Estado realizará los ajustes necesarios para que el reo retorne al Estado Trasladante y termine de cumplir su condena conforme a la sentencia que le fue impuesta, sujetándose a las consecuencias jurídicas que se originen de su conducta.

ARTICULO XV
Tránsito

Si el reo, al ser trasladado, tuviera que atravesar el territorio de un tercer Estado, éste deberá ser notificado mediante envío de la resolución que concedió el traslado por el Estado bajo cuya custodia se efectuará el mismo. En tales casos, el Estado de Tránsito podrá o no otorgar su consentimiento al paso del reo por su territorio.

Cuando el tercer Estado sea Parte de la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Sentencias Penales en el Extranjero, adoptada en Managua, el 9 de junio de 1993 y que no haya formulado una reserva al respecto, no será necesaria la notificación cuando se haga uso de los medios de transporte aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje en el territorio del país de tránsito que se vaya a sobrevolar.

ARTICULO XVI
Adecuación al Derecho Interno

Las Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias y establecer los procedimientos administrativos adecuados para el cumplimiento de los propósitos de este Tratado.

ARTICULO XVII
Aplicación

Este Tratado será aplicable al cumplimiento de sentencias dictadas con anterioridad o con posterioridad a su entrada en vigor, siempre que favorezca al reo.

ARTICULO XVIII
Disposiciones Finales

1. El presente Tratado entrará en vigor a la fecha de recepción de la última Nota diplomática por la que las Partes se comuniquen haber cumplido los requisitos constitucionales respectivos.

2. Este Tratado tendrá una duración indefinida y cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita a través de la vía diplomática. La denuncia será efectiva sesenta días después de haberse efectuado dicha notificación.

Firmado en la Ciudad de México, el catorce de febrero de dos mil, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**



**Rosario Green
Secretaria de Relaciones
Exteriores**

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE NICARAGUA**



**Eduardo Montealegre R.
Ministro de Relaciones
Exteriores**

[TRANSLATION - TRADUCTION]

TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA ON THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL SENTENCES

The Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Nicaragua, hereinafter referred to as "the Parties";

Desiring to promote mutual collaboration in respect of the enforcement of criminal sentences;

Being of the view that the purpose of rehabilitating offenders is to enable them to re-enter society once they have demonstrated good behaviour and carried out different types of activities in their place of imprisonment, so that they can act in a manner in harmony with the environment of our countries;

Considering that that objective would be served by enabling nationals who are deprived of their liberty abroad as a result of committing an offence to serve their sentence in their own country, since bringing them closer to their family and enabling them to live according to the customs of their country will facilitate their reintegration into society;

Have agreed as follows:

Article I. Definitions

For the purposes of this Treaty:

(a) "Sending State" means the State Party from which the offender is to be transferred;

(b) "Receiving State" means the State Party to which the offender is to be transferred;

(c) "Sentence" means the final judicial decision imposed on a person as a penalty for the commission of an offence, entailing deprivation or restriction of liberty, whether in the form of parole, probation, or other forms of supervision without detention. A sentence is understood to be final when no legal appeal is pending against it in the sending State, or when the time limit set for submitting such an appeal has expired;

(d) "Offender" means the person who, in the territory of one of the States Parties, is serving a sentence involving deprivation of liberty as a result of a decision that is being enforced.

Article II. Scope

1. Sentences imposed in the United Mexican States on nationals of Nicaragua may be served in penal establishments in Nicaragua or under the surveillance of its authorities in accordance with this Treaty and Nicaraguan legislation.

2. Sentences imposed in Nicaragua on nationals of the United Mexican States may be served in penal establishments of Mexico or under the surveillance of its authorities in accordance with this Treaty and Mexican legislation.

Article III. Coordinating authority

To ensure full compliance with the enforcement of criminal sentences between the Parties, the United Mexican States designate as coordinating authority the Office of the Attorney General of the Republic, and the Republic of Nicaragua designates as coordinating authority the Ministry of the Interior. These authorities shall be responsible for carrying out all of the functions envisaged in this Treaty.

Article IV. Conditions for application

This Treaty shall be applied solely under the following conditions:

1. That the offence of which the offender has been declared guilty is punishable in the receiving State; nevertheless, nominal differences or differences that do not affect the actual nature of the offence shall not be taken into consideration.

2. That the offender is a national of the receiving State. When the request for transfer is submitted, the offender must provide reliable evidence, with public documents, of his status as a national of the receiving State.

3. That the offence for which the offender was sentenced is not a political offence in the receiving State.

4. That the sentence imposed on the offender can be served or enforced in the receiving State.

5. That the sentence whereby which the penalty in question was imposed is enforceable and that there are no legal grounds whatsoever preventing the departure of the offender from the national territory. It is understood that there exists a final and enforceable sentence as defined in article 1 (c) of this Treaty. A request for extradition from a third State that is being processed or has been approved shall preclude authorization of the transfer.

6. That the situation of the offender is not made worse by the transfer.

7. That more than six months of the sentence remain to be served at the time when the application is made.

8. That the judgement specifies a fixed term for the sentence being served by the offender.

9. That the enforcement of the sentence does not contravene the internal legal order of the receiving State.

10. That the offender expressly consents to the transfer, having been previously informed of the legal consequences thereof.

Article V. Provision of information

The coordinating authorities designated by the Parties shall inform all offenders who are nationals of the other Party of the existence of the Treaty, of the option available to them under it, and of any possible legal consequences of the transfer. This information may also be provided to the offender by the consular agents of his country.

The Parties shall keep the offender informed of any proceedings relating to the transfer, as well as of any decisions adopted by either Party with respect to the application for transfer. To that end, the Parties shall provide the coordinating authorities with any information they request.

Article VI. Consent of the offender

1. The transfer of the offender to the receiving State shall only be carried out at the express request of that State, for which purpose it may contact the competent authority of the sending State to request it to prepare background documentation and studies relating to the offender.

2. The willingness of the offender to be transferred must be expressed in writing.

3. None of the provisions of this Treaty shall prevent an offender from submitting a request for transfer to the sending State or the receiving State.

Article VII. Procedure preceding the transfer

1. The sending State shall have discretionary power to authorize the transfer, and the receiving State shall have discretionary power to accept it.

2. Before the transfer is carried out, the sending State shall permit the receiving State to verify, if it so wishes and through an official designated by the latter State, that the offender has given his consent with full knowledge of the legal consequences thereof.

3. In determining whether to transfer an offender, the Parties shall consider, among other factors, the likelihood of furthering his social rehabilitation; the seriousness of the offence; his criminal record; the state of his health; and his family ties and social and other connections in the sending State and in the receiving State.

4. If the offender submits a request for transfer to the coordinating authority of the sending State and that authority considers it appropriate, it shall transmit a request to that effect through the diplomatic channel to the authority of the receiving State.

5. If the authority of the receiving State accepts the request, it shall so inform the sending State without delay and initiate the proceedings necessary for the transfer of the offender. If it does not accept the request, it shall so inform the authority of the sending State without delay.

6. If the offender submits a request for transfer to the coordinating authority of the receiving State, the latter may request the coordinating authority of the sending State to prepare the relevant background information and studies.

7. If the sending State considers the request for transfer of the offender to be appropriate, it shall so inform the receiving State so that, upon completion of the internal formalities, the offender can be surrendered.

8. If so requested by the receiving State, the sending State shall provide proof that the offender is aware of the legal consequences of the transfer and freely consents to such transfer.

Article VIII. Refusal of the request for transfer

1. If the sending State does not approve the transfer of an offender, it shall immediately communicate its decision to the receiving State and shall explain the reason for its refusal whenever feasible and appropriate. If there is a change in the conditions on which the refusal of the transfer request was based, either Party may again request the transfer of the offender.

2. If, after the sentence has been served, the transferred offender commits another offence in the territory of the sending State, the latter State may refuse any request for transfer of the offender made by the receiving State or by the offender.

Article IX. Supporting documentation

1. The receiving State shall attach to the request for transfer:

- (a) A document attesting to the fact that the offender is a national of that State;
- (b) A certified copy of the legal provisions showing that the actions or omissions which gave rise to the sentence are also offences in the receiving State;
- (c) Information concerning pertinent factors and the likelihood that the transfer will contribute to the social reintegration of the offender, taking into account such considerations as the offender's age, the connections created by residence in the territory, family ties or other circumstance, in the receiving State, and

(d) Approximate information concerning the way in which the sentence will be served in the receiving State, especially with regard to modality and time.

2. The sending State shall attach to the request for transfer:

- (a) A certified copy of the sentence, showing that it is enforceable;
- (b) A certified copy of the applicable legal provisions;
- (c) An indication of the duration of the sentence, time already served and time accruing to the offender for such reasons as work, good conduct and pretrial detention;
- (d) A document showing that the offender consents to the transfer, and
- (e) Information concerning the nature and seriousness of the offence, the criminal record of the offender, the state of the offender's health and any additional information that might be useful to the authorities of the receiving State.

3. Before formulating a request for transfer, either Party may request the other Party to provide the documents and information referred to in paragraphs 1 and 2 of this article.

Article X. Surrender and transfer expenses

1. Once the transfer is approved, the Parties shall agree on the place and date on which the offender is to be surrendered and the manner in which this is to be done. The receiving State shall be responsible for the custody and transport of the offender from the moment of surrender.

2. All expenses arising in connection with the transfer until the offender is placed in the custody to the receiving State shall be borne by the sending State.

3. The receiving State shall be responsible for the transfer expenses incurred as of the moment when the offender is placed in its custody.

4. The sending State shall not be entitled to any reimbursement whatsoever of the expenses incurred in connection with the enforcement of the sentence of the offender.

Article XI. Jurisdiction of the sending State

The sending State shall retain exclusive jurisdiction with regard to the sentences imposed and all procedures pertaining to the review, modification or annulment of the sentences imposed by its courts of justice. Consequently, upon receiving notification from the sending State of any decision that affects a sentence, the receiving State shall take the appropriate measures as specified in the aforesaid notification.

The sending State shall retain the power to commute the sentence or grant the offender an amnesty or pardon. On receiving notification of any such decision, the receiving State must immediately take the appropriate measures.

Article XII. Jurisdiction of the receiving State

1. The sentence of an offender shall be served in accordance with the laws and procedures of the receiving State, including the application of any provision with respect to a reduction of the term of imprisonment by means of probation, parole or any other alternative to imprisonment.

2. The receiving State shall not enforce any penalty involving imprisonment in such a way as to extend its duration beyond the date on which it was due to be completed in accordance with the sentence imposed in the sending State.

3. The coordinating authorities of the Parties shall exchange every six months reports on the status of enforcement of the sentences of all persons transferred under this Treaty, including, in particular, information concerning benefits available to offenders under the domestic law of each Party. The Parties may at any time request a special report on the status of the enforcement of specific sentences.

4. An offender who has been transferred to serve a sentence under this Treaty may not be detained, tried or sentenced in the receiving State for the same offence that gave rise to the sentence that is to be served, nor may that sentence be converted to a pecuniary penalty. The receiving State shall not initiate criminal proceedings against the offender for any offence which would not be actionable under the laws of that State.

5. The fact that an offender has been transferred under the terms of this Treaty shall not affect the offender's civil rights in the receiving State beyond the effect it would have, under the laws of that State, by the fact of the offender having been sentenced in the sending State.

Article XIII. Application of the Treaty in special cases

1. This Treaty shall also be applicable to persons subject to supervision or other measures under the laws of either Party relating to juvenile offenders, provided that the advisability of the transfer for purposes of readaptation is demonstrated. Consent for the transfer shall be obtained from the person legally empowered to grant it.

2. This Treaty may be applied with respect to persons whom the authority concerned has declared to be unindictable, if the Parties so agree and in order that the person concerned may receive treatment in the receiving State. The Parties shall agree on the type of treatment to be given to the transferred person in accordance with their domestic law. Consent for the transfer must be obtained from the person legally empowered to grant it.

3. By special agreement between the Parties and for humanitarian reasons, offenders who have been conclusively proved to be suffering from a terminal illness, or who are very old, may be transferred for treatment to institutions in the country of their nationality.

4. No provision of this Treaty shall be interpreted in such a way as to limit the power of the Parties to grant or refuse to grant the transfer of the offender.

Article XIV. Forgery of documents

If an offender uses forged documents to claim the nationality of the receiving State with a view to obtaining a transfer to the territory of one of the Parties, the coordinating authority of that State shall make the necessary arrangements for the offender to return to the sending State and complete the sentence imposed on him, submitting to the legal consequences of his conduct.

Article XV. Transit

If the offender, upon being transferred, must cross the territory of a third State, the latter should be notified through transmittal of the decision granting the transfer by the State under whose custody the transfer is to be effected. In such cases, the transit State may or may not consent to the transit of the offender through its territory.

If the third State is a party to the Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad, adopted at Managua on 9 June 1993, and has not formulated a reservation thereto, such notification shall not be necessary when air transport is used and no landing is scheduled in the territory of the transit country that is to be overflown.

Article XVI. Alignment with domestic law

The Parties undertake to adopt the necessary legislative measures and to establish adequate administrative procedures to fulfil the purposes of this Treaty.

Article XVII. Application

This Treaty shall apply to the execution of sentences imposed either before or after its entry into force, provided that this benefits the offender.

Article XVIII. Final provisions

1. This Treaty shall enter into force on the date of receipt of the last diplomatic Note by which the Parties notify each other of their compliance with the respective constitutional requirements.

2. This Treaty shall have an indefinite duration and either Party may terminate it by giving written notice through the diplomatic channel. The termination shall take effect sixty days after such notice has been given.

Signed at Mexico City on 14 February 2000, in two original copies in Spanish, both texts being equally authentic.

For the Government of the United Mexican States:

ROSARIO GREEN
Secretary for Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Nicaragua:

EDUARDO MONTEALEGRE R.
Minister for Foreign Affairs

[TRANSLATION - TRADUCTION]

TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA
RELATIF À L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS PÉNALES

Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République du Nicaragua, ci-après dénommés les " Parties ";

Désireux de favoriser la collaboration mutuelle touchant l'exécution des condamnations pénales;

Conscients de ce que la rééducation des délinquants vise à réinsérer ceux-ci dans la société après qu'ils aient fait preuve de bonne conduite et aient exercé différents types d'activités sur le lieu de leur détention de sorte que leur comportement puisse être à l'unisson du milieu ambiant des deux pays respectivement;

Considérant que pour atteindre cet objectif, il y aurait intérêt à donner aux nationaux privés de leur liberté à l'étranger pour avoir commis une infraction, la possibilité de purger leur peine dans leur propre pays, la réinsertion dans la société étant alors facilitée par le rapprochement avec la famille et le fait que les délinquants pourraient ainsi vivre conformément aux coutumes de leur pays;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Traité, on entend par :

- a) " État d'envoi ", l'État Partie à partir duquel le délinquant devra être transféré;
- b) " État de réception ", l'État Partie vers lequel le délinquant devra être transféré;
- c) " Jugement condamnatore ", la décision judiciaire définitive imposée à une personne pour sanctionner la commission d'une infraction entraînant une peine privative ou restrictive de liberté conditionnelle, liberté surveillée ou une autre forme de supervision non assortie de détention. Le jugement est considéré comme définitif lorsqu'aucun recours juridique n'est en cours dans le pays d'envoi ou lorsque les délais prévus pour un tel recours ont expiré;
- d) " Délinquant ", la personne qui purge une peine privative de liberté dans le territoire des États Parties en application d'une décision de justice.

Article II. Portée de l'Accord

1. Les peines imposées aux États-Unis du Mexique à l'encontre de nationaux du Nicaragua peuvent être servies dans des établissements pénitentiaires au Nicaragua ou sous la surveillance des autorités du Nicaragua conformément aux dispositions du présent Traité et de la législation nicaraguayenne.

2. Les peines imposées au Nicaragua à l'encontre de nationaux des États-Unis du Mexique peuvent être servies dans les établissements pénitentiaires du Mexique ou sous la surveillance des autorités du Mexique conformément aux dispositions du présent Traité et de la législation mexicaine.

Article III. Autorités de coordination

Afin que l'exécution des condamnations pénales soit strictement respectée entre les Parties, les États-Unis du Mexique désignent le Bureau du Procureur général de la République en tant qu'autorité de coordination; et la République du Nicaragua désigne le Ministère de l'intérieur en tant qu'autorité de coordination. Ces autorités seront chargées d'exercer toutes les fonctions prévues dans le présent Traité.

Article IV. Conditions d'application

L'application du présent Traité est soumise aux strictes conditions suivantes :

1. L'infraction pour laquelle la personne a été déclarée coupable doit constituer une infraction dans l'État de réception; il ne sera toutefois pas tenu compte des différences d'appellation ou de différences qui n'affectent pas la nature de l'infraction.

2. La personne condamnée doit être un national de l'État de réception. Lors de la soumission de la demande de transfèrement, la personne condamnée doit fournir une preuve valable, accompagnée de pièces officielles, de son statut de national de l'État de réception.

3. L'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné ne doit pas être de nature politique.

4. La peine imposée doit pouvoir être servie ou exécutée dans l'État de réception.

5. La condamnation aux termes de laquelle la peine a été imposée doit avoir force exécutoire et il ne doit y avoir aucun motif de droit qui empêche la personne condamnée de quitter le territoire national. Il est entendu qu'il doit s'agir d'une condamnation définitive et obligatoire au sens de l'alinéa c) de l'article premier du présent Traité. Une demande d'extradition présentée par un État tiers, qui est en cours ou a été approuvée, interdit l'octroi de l'autorisation de transfèrement.

6. La situation de la personne condamnée ne doit pas être aggravée par le transfèrement.

7. La durée de la peine que la personne condamnée doit encore servir au moment où la demande est présentée doit être supérieure à six mois.

8. Le jugement doit spécifier une durée précise pour la peine que sert la personne condamnée.

9. L'exécution de la peine ne doit pas contrevenir à l'ordre juridique interne de l'État de réception.

10. La personne condamnée doit donner son consentement exprès au transfèrement et doit avoir été informée au préalable des conséquences juridiques de celui-ci.

Article V. Fourniture de renseignements

Les autorités de coordination désignées par les Parties informent toutes les personnes condamnées qui sont ressortissantes de l'autre Partie de l'existence du Traité, des possibilités qui leur sont offertes en vertu des dispositions de celui-ci et de toutes éventuelles conséquences du transfèrement. Cette information peut être également communiquée à la personne condamnée par les agents consulaires des pays dont celle-ci ressort.

Les Parties tiennent la personne condamnée informée de toute procédure relative au transfèrement et de toute décision adoptée par l'une d'elles en ce qui concerne la demande de transfèrement. À cette fin, elles fournissent aux autorités de coordination tout renseignement que celles-ci peuvent demander.

Article VI. Consentement de la personne condamnée

1. Le transfèrement de la personne condamnée dans l'État de réception n'a lieu qu'à la demande exprès de cet État qui, à cette fin, peut prendre contact avec l'autorité compétente de l'État d'envoi pour demander à celle-ci d'établir le dossier, y compris les antécédents, se rapportant à la personne condamnée.

2. Le délinquant doit exprimer sa volonté d'être transféré par écrit.

3. Aucune disposition du présent Traité n'interdit à la personne condamnée d'adresser une demande de transfèrement à l'État d'envoi ou à l'État de réception.

Article VII. Procédure préalable au transfèrement

1. L'État d'envoi est habilité, à sa discrétion, à autoriser le transfèrement, et l'État de réception est habilité, à sa discrétion, à l'accepter.

2. Avant que le transfèrement n'ait lieu, l'État d'envoi autorise l'État de réception, si celui-ci le souhaite et par l'intermédiaire d'un représentant désigné par ledit État de réception, à s'assurer que la personne condamnée a bien donné son consentement au transfèrement, et ce en pleine connaissance des conséquences juridiques de celui-ci.

3. Aux fins de déterminer si le délinquant doit être transféré, les Parties considèrent plusieurs facteurs, dont les chances que le transfèrement contribue à la réinsertion sociale du délinquant, la gravité de l'infraction qu'il a commise, son casier judiciaire, son état de santé, les liens familiaux, sociaux ou autres, existant aussi bien dans l'État d'envoi que dans l'État de réception.

4. Lorsque le délinquant présente une demande de transfèrement à l'autorité de l'État d'envoi et que cette autorité estime que le transfèrement est justifié, elle doit transmettre une demande à cet effet à l'autorité de coordination de l'État de réception par les voies diplomatiques.

5. Si l'autorité de l'État de réception accepte de faire droit à la demande, elle en informe promptement l'État d'envoi et entreprend les démarches nécessaires au transfèrement du délinquant. Dans le cas contraire, elle informe sans retard l'autorité de l'État d'envoi de sa décision.

6. Lorsque le délinquant présente une demande de transfèrement à l'autorité de coordination de l'État de réception, cette dernière peut demander à l'autorité de coordination de l'État d'envoi d'établir le dossier, y compris les antécédents.

7. Si l'État d'envoi estime que la demande de transfèrement du délinquant est justifiée, il en informe l'État de réception de manière que la remise dudit délinquant puisse avoir lieu dès l'achèvement des procédures internes requises.

8. Si la demande lui en est faite par l'État de réception, l'État d'envoi fournit la preuve que le délinquant se rend bien compte des conséquences juridiques du transfèrement et qu'il donne son libre consentement à une telle mesure.

Article VIII. Refus du transfèrement

1. Lorsque l'État d'envoi n'approuve pas le transfèrement d'une personne condamnée, il communique immédiatement sa décision à l'État de réception en donnant les raisons de son refus si cela est possible et approprié. En cas de changement des circonstances ayant motivé le refus, l'une ou l'autre Partie peut présenter une nouvelle demande de transfèrement du délinquant.

2. Si, une fois la peine servie, le délinquant se rend coupable d'un autre délit sur le territoire de l'État d'envoi, ledit État d'envoi peut refuser de donner droit à toute demande de transfèrement du délinquant présentée par l'État de réception ou le délinquant.

Article IX. Établissement du dossier

1. La demande de transfèrement de l'État de réception est accompagnée des pièces suivantes :

a) Un document attestant que l'auteur de l'infraction est bien un ressortissant de l'État de réception;

b) Un exemplaire dûment certifié des dispositions juridiques indiquant que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation constituent également des infractions dans l'État de réception;

c) Des renseignements relatifs aux facteurs pertinents et aux chances que le transfèrement contribue à la réinsertion sociale du délinquant, compte tenu de considérations telles que l'âge, les liens noués dans le pays de réception, les liens familiaux et autres circonstances existant dans l'État de réception; et

d) Des renseignements généraux concernant la manière dont la peine sera servie dans l'État de réception, notamment les modalités et la durée.

2. La demande de transfèrement de l'État d'envoi est accompagnée des pièces suivantes :

a) Un exemplaire dûment certifié de la peine, indiquant que celle-ci est obligatoire;

b) Un exemplaire dûment certifié des dispositions juridiques applicables;

c) L'indication de la durée de la peine, de la durée de la peine déjà servie et des réductions de la durée de la peine dont pourra bénéficier le délinquant pour bonne conduite, travail, ou détention préventive;

- d) Un document montrant que le délinquant consent au transfèrement; et
- e) Des renseignements concernant la nature et la gravité de l'infraction, le casier judiciaire du délinquant, son état de santé et tout renseignement additionnel qui pourrait être utile aux autorités de l'État de réception.

3. Avant de présenter une demande de transfèrement, une Partie peut demander à l'autre de fournir les pièces et renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article X. Remise du délinquant et dépenses afférentes au transfèrement

Une fois le transfèrement approuvé, les Parties conviennent des lieux et dates auxquels le délinquant sera remis et des modalités de la remise. L'État de réception est chargé de la garde et du transport du délinquant à partir du moment où celui-ci est remis.

2. Tous les frais occasionnés par le transfèrement jusqu'au moment où le délinquant est remis entre les mains de l'État de réception sont à la charge de l'État d'envoi.

3. L'État de réception prend à sa charge les frais du transfèrement à compter du moment où le délinquant lui est remis.

4. L'État d'envoi n'aura droit à aucun remboursement pour frais occasionnés par l'exécution de la sentence.

Article XI. Juridiction de l'État d'envoi

L'État d'envoi conserve la juridiction exclusive pour ce qui est des peines infligées et de toutes les procédures touchant la révision, la modification ou l'annulation de la peine imposée par ses tribunaux. En conséquence, dès que l'État de réception aura été notifié par l'État d'envoi de toute décision affectant la peine, il prendra toute mesure voulue comme spécifié dans la notification.

L'État d'envoi conserve la capacité de commuer la peine du délinquant ou d'accorder à celui-ci grâce ou pardon. Dès qu'il aura été notifié d'une telle décision, l'État de réception prendra immédiatement les mesures qui s'imposent.

Article XII. Juridiction de l'État de réception

1. La peine infligée au délinquant est servie conformément aux lois et règlements de l'État de réception, y compris l'application de toute disposition relative à la réduction de la durée de l'emprisonnement pour raison de probation, liberté surveillée ou autre mesure modifiant ladite peine d'emprisonnement.

2. L'État de réception n'applique aucune peine d'emprisonnement de manière à en prolonger la durée au-delà de la date prévue pour son achèvement conformément à la peine imposée dans l'État d'envoi.

3. Les autorités de coordination des Parties se font mutuellement rapport tous les six mois sur l'état d'exécution des sentences imposées à toutes les personnes transférées en application du présent Traité et fournissent notamment des renseignements concernant les avantages offerts aux délinquants aux termes de la législation interne de chaque Partie. Les

Parties peuvent demander à tout moment un rapport spécial sur l'état d'exécution de peines données.

4. Un délinquant transféré pour servir une peine conformément au présent Traité ne peut être détenu, passé en jugement ou condamné dans l'État de réception pour la même infraction que celle qui a donné lieu à la peine devant être servie; ladite peine ne peut non plus être convertie en une peine pécuniaire. L'État de réception ne doit en aucun cas engager de procédures criminelles contre le délinquant pour toute infraction qui ne serait pas possible de poursuites en vertu de lois de cet État.

5. Le fait qu'un délinquant ait été transféré en application du présent Traité n'affecte pas ses droits civils dans l'État de réception au-delà des effets que le jugement aurait entraînés, en vertu des lois de cet État, du fait qu'une peine a été imposée audit délinquant dans l'État d'envoi.

Article XIII. Application du Traité dans des cas spéciaux

1. Le présent Traité s'applique à toutes les personnes soumises à supervision ou toute autre mesure en vertu des lois de l'une ou l'autre Partie relative aux jeunes délinquants, à condition qu'il soit démontré que le transfèrement est recommandé aux fins de la réinsertion. Le consentement au transfèrement doit être obtenu de la personne qui est légalement habilitée à ce faire.

2. Le présent Traité peut être appliqué aux personnes que l'autorité pertinente considère comme ne pouvant être poursuivies, si les Parties en conviennent et afin que la personne concernée puisse se faire traiter dans l'État de réception. Les Parties conviennent du type de traitement que devra suivre la personne transférée conformément à leur droit interne. Le consentement au transfèrement doit être donné par la personne légalement habilitée à le faire.

3. Par accord spécial des Parties et pour des raisons humanitaires, les délinquants ayant prouvé de manière conclusive qu'ils étaient atteints d'une maladie entrée dans sa phase terminale ou qui sont très âgés, peuvent être transférés dans une institution du pays de leur nationalité pour s'y faire traiter.

4. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée de manière à limiter la faculté dont disposent les Parties d'accéder ou non à une demande de transfèrement d'un délinquant.

Article XIV. Falsification de pièces

Si un délinquant produit des documents falsifiés pour revendiquer la nationalité de l'État de réception en vue d'obtenir un transfèrement dans le territoire de l'une des Parties, l'autorité de coordination de cet État prend les mesures voulues pour qu'il retourne dans le pays d'envoi afin d'y purger la peine qui lui a été infligée et de subir les conséquences juridiques de ses actes.

Article XV. Transit

Si le transfèrement du délinquant implique le transit par le territoire d'un État tiers, ledit État tiers doit être notifié en conséquence. À cette fin, la décision de l'État responsable du transfèrement, autorisé par lui, devra lui être communiquée. Dans de tels cas, l'État de transit a la latitude de consentir au transit par son territoire ou de s'y opposer.

Si l'État tiers est partie à la Convention interaméricaine sur l'exécution des décisions pénales prises à l'étranger, adoptée à Managua le 9 juin 1993, cette notification n'est pas nécessaire lorsque le transport s'effectue par voie aérienne et qu'il n'est prévu aucun atterrissage dans le pays de transit, dont le territoire sera survolé.

Article XVI. Harmonisation de la législation interne

Les Parties s'engagent à adopter les mesures législatives voulues et à mettre en place les mécanismes administratifs appropriés pour mettre en oeuvre les objectifs du présent Traité.

Article XVII. Application

Le présent Traité s'appliquera à l'exécution des peines imposées avant ou après son entrée en vigueur, dans la mesure où une telle application est avantageuse pour le délinquant.

Article XVIII. Dispositions finales

1. Le présent Traité entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des notes diplomatiques par laquelle les Parties se seront notifiées qu'elles ont satisfait à leurs exigences constitutionnelles respectives.

2. Le présent Traité est conclu pour une durée indéfinie. Chacune des Parties pourra le dénoncer moyennant une notification écrite transmise par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet soixante jours après la date de ladite notification.

Signé à Mexico City, le 14 février 2000, en deux exemplaires originaux, en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique :

Le Secrétaire aux affaires étrangères,

ROSARIO GREEN

Pour le Gouvernement de la République du Nicaragua :

Le Ministre des affaires étrangères,

EDUARDO MONTEALEGRE R.

